

Santiago, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 451-2017, por resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en lo que interesa al recurso, se condenó a **LUIS ALBERTO MEDINA ALDEA**, a la pena de **cinco** años de presidio menor en su grado máximo, como autor de los delitos reiterados de torturas y/o tormentos en las personas de Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz, Marcos Erik Pezoa Salfate, Manuel Jesús Lara Bustamante, Alfonso Araya Salinas, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Adolfo Ernesto Lara Bustamante Orlando Martín Moraga Fuentealba, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y María Luisa Gutiérrez Catalán; y en calidad de autor de los delitos de torturas y/o tormentos y abusos deshonestos en la persona de Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, y a las accesorias de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Apelada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, resolvió:

I.- Que se revoca la sentencia apelada de fecha diecisiete de diciembre de dos dieciocho, escrita a fojas 2169 y su complemento de fojas 2573, sólo en cuanto por ella:

a) Se condenó a Luis Alberto Medina Aldea en calidad de autor del delito de abusos deshonestos, previsto en el artículo 366 del Código Penal -vigente a la



época de ocurrencia de los hechos-, en la persona de doña María Luisa Gutiérrez Catalán y en su lugar, se decide que se absuelve por dicho acápite.

b) Se condenó en costas al Fisco de Chile, eximiéndosele en consecuencia, de su pago, atendido lo razonado en la motivación vigésima tercera.

c) Se rechazó la demanda civil deducida a fojas 1688 por don Manuel Jesús Lara Bustamante y se decide, en su lugar, que, acogándose la excepción de cosa juzgada opuesta en segunda instancia, por el demandado Fisco de Chile en su presentación de fojas 2507 y siguientes, se la rechaza , sin costas por haber tenido motivos plausibles para deducirla. II.- Que se confirma, en lo demás apelado, la aludida sentencia.

CONSIDERANDO:

1º) Que la defensa del acusado Medina, sustenta su recurso de casación en el fondo en la causal prevista en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo dispuesto en los artículos 11 N° 6, 15, 16, 17, 68 inciso 3° y 103, todos del Código Penal.

Indica, en primer lugar, que los sentenciadores incurren en un error de derecho al no considerar la atenuante del artículo 11 N° 6 como muy calificada Indica que la falta de calificación constituye un error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo puesto que de no haberse cometido el fallo recurrido debería haber considerado el hecho como revestido de a lo menos tres atenuante muy calificadas, determinando una penalidad que no podría haber sido superior a una pena de presidio menor en su grado mínimo.



El segundo error de derecho denunciado lo hace consistir en el hecho que los sentenciadores no aplicaron la minorante contemplada en el artículo 103 del Código Penal.

Alega como tercer error de derecho la infracción a los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal; porque no hay antecedentes para atribuirle participación a su defendido y si alguna responsabilidad penal pudiere tener el señor Medina sólo podría existir inicialmente como encubridor.

Indica que no existen antecedentes para que pudiere ser considerado autor ejecutor del artículo 15 número 1 desde que si bien efectivamente las víctimas fueron detenidas, los hechos descritos y tenidos como probados son exclusivamente atribuibles al capitán de Ejército don Joaquín Molina.

Agrega que como secretario, no tenía dominio alguno del hecho ni menos mando militar sobre un Capitán, mucho menos, preparación efectiva en materia de inteligencia y no existen antecedentes que hubiera colaborado con hechos anteriores o simultáneos en los mismos.

Pide que se anule la sentencia recurrida y, sin nueva vista, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, y en ella se declare que debe considerársele, en el peor de los casos, encubridor del referido delito y en consecuencia, su pena inicia en presidio menor en su grado medio; luego, que debe considerársele también la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal como muy calificada y también las muy calificadas derivadas del artículo 103 del Código Penal, y, haciendo una correcta aplicación de la norma del artículo 68 del Código Penal, en definitiva se le condene a una pena de prisión y en ningún



caso superior a la prisión en su grado medio, concediéndole los beneficios de la ley 18.216;

2°) Que los querellantes y demandantes Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas, deducen recurso de casación respecto de la parte penal y civil de la sentencia.

Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo de la parte penal de la sentencia, lo fundan genéricamente en el artículo 546, sin explicitar el numeral que lo sustenta.

Refiere que la sentencia no considera la agravante del artículo 12 N° 16 Código Penal. Para ello invocan la condena en causa que, a la fecha, se encuentra firme y ejecutoriada, Rol 411-2017 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, conocida en alzada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Penal-1735-2017 y casada en el fondo para ante la Excma. Corte Suprema, en autos Rol criminal-8318-2018, en los cuales, la Segunda Sala condenó en definitiva a Luis Alberto Medina Aldea a la pena de doscientos días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de aplicación de tormentos del artículo 150 del Código Penal, cometido en la persona de Guillermo Humberto Torrealba Pasten;

3°) Que también los mismos querellantes impugnaron la sentencia, deduciendo recurso de casación en el fondo en el aspecto civil de ésta, denunciando como normas infringidas, los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República; artículos 3 y 4 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y lo dispuesto en la Ley N° 19.123.



En cuanto al orden internacional exponen que se han infringido -especialmente- lo dispuesto y señalado en los artículos 3 numeral 1) y 131 de la Convención de Ginebra de 1949, y en los artículos 5.2 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica.

Precisan que el fallo aludido no considera la normativa internacional para los efectos de otorgarles una justa indemnización y se autoimpone un límite, que consistiría en no acudir a la analogía para considerar que, ante situaciones similares, debe estarse a indemnizaciones similares.

Piden que se invalide el fallo recurrido en este acto y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva:

1- Que, en lo penal, se considere la agravante del artículo 12 N° 16 del Código Penal y se eleve consecuentemente la pena determinada a los delitos señalados.

2- Que, en lo civil, se aumente prudencialmente las indemnizaciones otorgadas a Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas.

3- Que se condene en costas a la recurrida;

4°) Que el querellante Adolfo Ernesto Lara Bustamante, dedujo recurso de casación forma y fondo contra parte civil del fallo.

En cuanto a la casación en la forma, funda la misma en la causal que contempla el artículo 768 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, añadiendo que no hay consideración ni análisis alguno de la decisión de Corte de Apelaciones; tribunal que, confirmando el fallo de primera instancia, ordenó pagar



la suma de \$20.000.000 en el caso de Adolfo Lara Bustamante y \$40.000.000 en el caso de todos los demás actores.

Solicita que se invalide el fallo que estima viciado y que se determine que el proceso quede en estado de dictar una nueva sentencia, para conocimiento y resolución por la Excma. Corte Suprema, todo con costas.

En relación al recurso de casación en el fondo, el recurrente denuncia como infringidos los artículos 19 N° 2 Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, y el artículo 24 del Pacto San José de Costa Rica.

Señala que la infracción se produce precisamente por el hecho de otorgar a Adolfo Lara Bustamante, a título de indemnización, la mitad de lo que se otorgó a los demás querellantes y demandantes, lo que es evidentemente discriminatorio, máxime cuando en los fallos de primera y segunda instancia no se da ninguna razón que justifique tal discriminación.

Pide que se invalide este fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva, precisamente, que se hace lugar a la demanda civil interpuesta a fojas 1.688, con costas, en cuanto se condena al Fisco de Chile y a Luis Alberto Medina Aldea a pagar en forma solidaria a Adolfo Ernesto Lara Bustamante, la suma de \$40.000.000, los que se reajustarán según la variación experimentada por el I.P.C. fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre la fecha que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria y su pago efectivo, e intereses desde que se constituya en mora;

I.- EN CUANTO A LA PARTE PENAL DE LA SENTENCIA.

5º) Que, en cuanto al recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado Medina, si bien se funda únicamente en la causal del artículo 546 N°



1 del Código de Procedimiento Civil, tal forma de asentar la causal deducida, esto es, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto -como lo es el de casación en el fondo-, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamentos, los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva; todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta razonamientos y peticiones alternativos y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio. En efecto, resulta incompatible la petición de rebajar la pena -por la supuesta concurrencia de modificatorias de responsabilidad penal- con la petición de absolución por falta de participación;

6°) Que la jurisprudencia a este respecto es, como se ha visto, numerosa y sostenida, contando con decisiones muy recientes, que otorgan sólido respaldo a lo que se resuelve en estos casos, que es el rechazo de los recursos por razones que, si bien son formales, no pueden ser obviadas por esta Sala, atendida la función que le está encomendada como tribunal de casación;

7°) Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación a la infracción de los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal, arguye que no existen antecedentes para que pudiese ser considerado autor ejecutor del artículo 15 número 1 del Código Punitivo, desde que, si bien las víctimas fueron efectivamente detenidas, los hechos descritos y tenidos como probados, son exclusivamente atribuibles al Capitán de Ejército don Joaquín Molina.



Indica que, como secretario, no tenía dominio alguno del hecho ni menos mando militar sobre un Capitán, mucho menos, preparación efectiva en materia de inteligencia, y asimismo, que no existen antecedentes que hubiera colaborado con hechos anteriores o simultáneos en los mismos.

Cabe indicar que, conforme establece el sentenciador de primera instancia en su considerando 8°, *“En el tiempo que permanecieron privados de libertad en los distintos centros de reclusión, en diversas oportunidades fueron trasladados a la Intendencia de la región donde funcionaba también la Fiscalía Militar, para ser entrevistados tal como lo ha señalado el acusado Medina en sus indagatorias, éste además sostuvo haber confeccionado las listas con los nombres de los detenidos que eran requeridos para dicha instancia, lo que dista en cuanto a la terminología empleada, de aquello referido por las propias víctimas, quienes expusieron en sus atestados haber sido sacados de los recintos penitenciarios para ser interrogados acerca de armas, nombres de otras personas, actividades, etc., y cuyas respuestas de no ser satisfactorias para sus interrogadores conllevaba una serie de agresiones psicológicas y físicas, o atentados en contra de su indemnidad sexual, sea con golpes de pies y puños en diferentes partes de; (sic) cuerpo, golpes con un elemento denominado por las víctimas “tonto de goma”, aplicación de electricidad en manos, genitales y otras partes sensibles de;(sic) cuerpo, y además de lo anterior, en el caso de las mujeres, ataques de índole sexual, ya que se les rasgó sus vestimentas y se les efectuaron tocaciones en sus senos, piernas, y frotaron sus cuerpos con el de ellas, un daño que se ve reflejado en los informes remitidos por el servicio médico legal en sus respectivos protocolos de Estambul.*



La participación de Medina en los ilícitos, se acredita con los propios dichos de los querellantes, quienes en su mayoría le han reconocido en diligencias de careo por sus rasgos físicos, y aquellos que no han tenido la certeza de si se trata de él, han sido categóricos en manifestar que están seguros que un Teniente de apellido Medina los torturó en la fiscalía, y tal como lo señaló el propio acusado en sus indagatorias "(...) siendo el único Teniente Medina en ese entonces", a lo que hemos agregado los testimonios de oídas de personal de Gendarmería, de otros detenidos o testigos que han declarado en el curso de la investigación, cuyos atestados se encuentran debidamente individualizado en este fallo, que dan cuenta de la participación de; acusado Medina Aldea en interrogatorios e incluso de ellos haber visto a algunas de las víctimas llegar en malas condiciones luego de sus interrogatorios, como también lo señaló Patricio Rodolfo Javier Núñez Oliveira, médico, quien atendió en la enfermería a los detenidos de la cárcel de Rancagua, y que da fe de las condiciones en que estos arribaban a esas dependencias".

Lo anterior es ratificado por los sentenciadores de segunda instancia al referirse a la participación del sentenciado en el motivo décimo, en el que dan cuenta de los medios probatorios para asentar su participación, y, descartando cualquier error en la persona, es reconocido por parte de sus víctimas, de manera tal que con la prueba referida, no existe error de derecho al calificar la participación de Medina como autor directo, de conformidad lo establece el artículo 15 N° 1 del Código Penal. Por tal motivo el recurso tampoco puede prosperar;

8°) Que respecto de la segunda infracción de derecho que hace valer la defensa, fundada en que los sentenciadores no calificaron la conducta del



sentenciado como lo ha resuelto esta Corte, la determinación de la concurrencia o no de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y calificación, si procediere, constituye una labor privativa del órgano jurisdiccional cuya decisión se concreta en el fallo, de manera que la negativa a reconocer la circunstancia atenuante no configura una infracción de ley que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que dicha causal no puede prosperar;

9°) Que, avocándonos al examen del tercer error de derecho denunciado por la inaplicación de la rebaja prevista en el artículo 103 del Código Penal, este será desestimado, comparte esta Corte lo razonado por el fallo en examen, debiendo nada más reiterarse que, dado que tanto la media prescripción, como la causal de extinción de la responsabilidad penal de prescripción, se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación; luego, la improcedencia de la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, puesto que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento, que es rechazado por el ordenamiento penal internacional tratándose de un delito de lesa humanidad, como el de la especie, de forma que ninguno de tales institutos resulta aceptable, conforme se ha sostenido por esta Corte reiteradamente (SCS Rol N° 17.887-2015, de 21 de enero de 2015; 24.290-2016 de 8 de agosto de 2016; 44.074-2016 de 24 de octubre de 2016; 9.345-2017, de 21 de marzo de 2018; 8.154-2016 de 26 de marzo de 2018; y, 825-2018 de 25 de junio de 2018);

10°) Que, en cuanto a la casación en el fondo que presentan los querellantes Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas, se funda en el hecho que no se aplicó respecto del sentenciado la agravante de responsabilidad penal de



reincidencia específica, invocando para ello la condena en causa que a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada, Rol 411-2017 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, conocida en alzada ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, en causa Rol Penal-1735-2017, y recurrida de casación en el fondo para ante esta Excm. Corte Suprema, en autos Rol criminal-8318-2018, ocasión en que, por sentencia de fecha veintiséis de septiembre de 2019 pronunciada por la Segunda Sala, se condenó en definitiva a Luis Alberto Medina Aldea, a la pena de doscientos días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de aplicación de tormentos previsto en el artículo 150 del Código Penal, cometido en la persona de Guillermo Humberto Torrealba Pasten.

Sin embargo, el error de derecho denunciado no es tal, toda vez que a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa, el sentenciado no registraba en su extracto de filiación ningún reproche penal a su respecto, por lo que la causal alegada no puede prosperar;

II.- EN CUANTO A LA PARTE CIVIL DE LA SENTENCIA.

11°) Que, en cuanto a la casación en el fondo que presentan los querellantes y demandantes civiles Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas, fundados en que consideran que la Corte desatiende el segundo elemento para determinar la evaluación del daño moral, el que, según se indicó, se trata de lograr una “justa indemnización”, derivada del mandato internacional.

Procede, entonces, analizar el recurso deducido, siendo en este punto necesario tener en consideración que la acción civil interpuesta en contra del Fisco de Chile tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios



ocasionados por el actuar de agentes del Estado, lo que resulta plenamente procedente, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares, encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su consagración normativa, en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 y en el artículo 6 de la Constitución Política. (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, Rol N° 15.402-18, de 21 de febrero de 2019 y Rol N° 29.448-18 de 27 de agosto de 2019, entre otras);

12°) Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, devienen de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, así como aspectos de justicia material. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo, comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional



del Estado. (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Carta Fundamental, en cuanto señala que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este orden de ideas, el artículo 6 de la misma Constitución Política -al igual que la disposición antes referida-, forma parte de las denominadas “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción, disponiendo que *“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”*, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional de descartar la aplicación de las disposiciones legales que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. Así, la disposición en comento enseña que *“los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”*, y concluye señalando que *“la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”*;

13°) Que, como ha señalado reiteradamente esta Corte, este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos, los



Estados tienen una obligación de resultado, cual es la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por ello, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, ya que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce al momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pag. 25). En efecto, se trata –como se indicó- de una responsabilidad objetiva, donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que, con su actuar, infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, siendo irrelevante, para estos efectos, la subjetividad del autor material del acto;

14º) Que, de lo que se ha venido señalando, se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, la que no es extraña a nuestra legislación, pues el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 señala que *“La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército”*. Complementa lo anterior, el artículo 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto dispone que *“Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo”*, el que, por cierto, supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación,



incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto, encontramos también el principio 15 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005-, el cual expresa que *“Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”*.

En el mismo sentido, se ha expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de la Haya, que *“toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”*. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).



En síntesis, la obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los derechos humanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene razonando;

15°) Que, en estas condiciones, no resulta efectivo que los jueces del grado incurriesen en un error de derecho al momento de confirmar el monto de la indemnización establecido en la sentencia de primera instancia, ascendente a la suma de cuarenta millones de pesos (\$ 40.000.000), toda vez que, teniendo presente la extensión del periodo de privación de libertad, esto es, desde septiembre de 1973 al mes de diciembre del mismo año, se condice con los montos que esta Corte ha estado fijando para casos similares;

16°) Que en lo relativo al recurso de casación en la forma interpuesto por el demandante Adolfo Ernesto Lara Bustamante, se funda en la causal contemplada en el artículo 768 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto la sentencia recurrida no contiene consideraciones -ni análisis alguno- del motivo que la llevó a confirmar el fallo de primera instancia, que ordenó pagar la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) en el caso de Adolfo Lara Bustamante, y \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) en el caso de todos los demás actores;

17°) Que, de la lectura del recurso, se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo, es haber establecido a título de indemnización por el daño moral padecido por el demandante una suma de dinero que no se condice con los daños sufridos por este, y no haber explicitado cómo se llegó a determinar dicha suma en \$20.000.000 (veinte millones de pesos), sólo respecto de él como actor civil, siendo que, tratándose del resto de los demandantes, se les otorgó el doble.



Denuncia que el fallo recurrido no señala cuáles fueron las razones de hecho y de derecho que justificarían dicho quantum.

Con estos argumentos, solicita la invalidación de la sentencia, a objeto que, en su reemplazo, se resuelva fijar el mismo monto que se aplicó al resto de los demandantes;

18°) Que, conforme al artículo 768 N° 5 del cuerpo legal antes aludido, es causal de nulidad formal, que el fallo haya sido pronunciado con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales se encuentran los estatuidos en su numeral cuarto, que exige que la sentencia contenga las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Dicho requerimiento legal, dice relación con el imperativo de fundamentación que recae sobre las resoluciones judiciales, el que se satisface con los razonamientos lógicos y armónicos que deben contener, a efectos de justificar por qué establecen los hechos que consigna y luego, aplica el derecho correspondiente. Así, la falta de fundamentos se configura por la ausencia de esos raciocinios o motivaciones, y también, cuando los expresados son parciales e insuficientes o cuando en ellos existe incoherencia interna, arbitrariedad o irracionalidad.

Tal exigencia proviene, además, de la calificación de justo y racional del procedimiento que debe mediar para asentar las decisiones de los órganos que ejercen jurisdicción en el Estado;

19°) Que el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 169, 170 y 171, reguló la forma de las sentencias; a su turno, el artículo 768 N° 5 del mismo cuerpo normativo establece, como causal de casación en la forma, la de haber



sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170, entre ellos, el que contempla el número 4 de este precepto, que dispone que las sentencias de primera instancia y las de segunda -que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales- deben contener las consideraciones de hecho y de derecho que les sirven de basamento.

Asimismo, el artículo 5 transitorio de la Ley N° 3.390, de 15 de julio de 1918, dispuso: *“La Corte Suprema establecerá, por medio de un auto acordado, la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 193 y 958 (170 y 785) del Código de Procedimiento Civil”*, ante lo cual este tribunal procedió a dictar el Auto Acordado de fecha 30 de septiembre de 1920, expresando que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las que revoquen o modifiquen las de otros tribunales, contendrán: ... *“5° Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que deba fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquéllos respecto de los cuales haya versado la discusión; 6° En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales; 7° Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes; 8° Establecidos los*



hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso; 9° La enunciación de las leyes o en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 10° Tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observará al consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera, y, al efecto, se observarán, en cuanto pueda ser aplicable a tribunales unipersonales, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil” -actual artículo 83 del Código Orgánico de Tribunales-;

20°) Que las consideraciones de hecho exigen, asentar con exactitud los elementos fácticos que sirven de apoyo a las peticiones formuladas por los litigantes, orientadas a la decisión del asunto controvertido, sobre la base de los medios de justificación aportados al proceso. Ahora bien, para el debido establecimiento de los hechos, resulta imperativo que el tribunal efectúe un estudio y análisis de la prueba rendida, expresando con claridad y precisión las razones que conduzcan a darlos por acreditados, establecimiento que es igualmente necesario para el fallo del tribunal de casación, pues deberá aceptarlos aunque le merezcan una calificación jurídica distinta, a menos que se reclame y compruebe infracción a las leyes reguladoras de la prueba, que le permita asentar hechos distintos.

Esta Corte ha destacado, en diversas oportunidades, la importancia de consignar las consideraciones de hecho y de derecho como requisitos indispensables de las sentencias judiciales, que propenden a la legalidad del fallo, a la vez que posibilitan a las partes conocer las razones de la decisión, dejándolas en condiciones de interponer los recursos que estimen procedentes.



De este modo, por imperativo legal, toda sentencia definitiva ha de iniciar sus consideraciones con el análisis de la prueba rendida y posterior establecimiento de los hechos que se dan por probados, para luego razonar acerca del derecho aplicable y, consecuencialmente, sobre la procedencia de las acciones y defensas planteadas.

En este sentido, cabe tener en consideración que dichos motivos de invalidación tienen -según la constante jurisprudencia- un carácter esencialmente objetivo y, para pronunciarse acerca de su procedencia, basta un examen externo del fallo a fin de constatar si concurren o no los requerimientos que exige la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o legalidad de las afirmaciones que de ellas se desprendan, aquilatar su mérito intrínseco o el valor de convicción que deba atribuírseles;

21º) Que, en la especie, resulta evidente que la sentencia impugnada adolece de las falencias denunciadas, toda vez que de un estudio de ella aparece -en los términos acotados en la reflexión anterior- una nula y por lo tanto insuficiente exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, en todos sus extremos, por lo que no se ha acatado el mandato del legislador.

Efectivamente, la sentencia recurrida, luego de exponer las alegaciones contenidas en los recursos deducidos por las partes y citar jurisprudencia que establece la procedencia de la indemnización de perjuicios en este tipo de casos, en el considerando vigésimo expresa: *“En conclusión, una vez que se acreditaron las secuelas sufridas por los actores, en cuanto al dolor, la angustia y consecuencias negativas que les produjeron, considerándose los parámetros antes desarrollados, además de la gravedad de los hechos ilícitos, sus*



consecuencias y las circunstancias en que aquél aconteció es dable considerar que en la especie, el daño se ha prolongado en el tiempo, lo que se ha materializado en heridas sin cicatrizar, ocasionándosele efectos psicológicos de carácter permanente, los que han sido explicitados latamente en la sentencia en alzada, aplicándose los principios de razonabilidad y proporcionalidad”; luego de lo cual confirma la sentencia apelada, sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a mantener, respecto del recurrente, una indemnización menor a la del resto, lo que, atendida la naturaleza de la impugnación formulada, constituye la omisión de los razonamientos de juicio denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que, para una adecuada resolución del asunto, era imperativo analizar los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a Adolfo Ernesto Lara Bustamante. La controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile, con su actuar, causaron al recurrente;

22°) Que como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, porque no acata la exigencia del literal N°4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo que, en las



condiciones anotadas, el recurso de casación en la forma promovido en contra del fallo impugnado por la demandante, será acogido;

23°) Que, atendido lo resuelto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo, por innecesario.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, y en los artículos 500, 535, 541 N° 9, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, **se decide** que:

I. EN LO PENAL.

1.- Se **rechazan** los recursos de casación en el fondo impetrados en favor del sentenciado, en contra de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

2.- Se **rechaza** el recurso de casación el fondo deducido por los querellantes Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas, en contra de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

II. EN LO CIVIL.

3.- Se **rechaza** el recurso de casación el fondo deducido por los querellantes y actores civiles Juan Carlos Pérez Muñoz, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno y Alfonso Araya Salinas, en contra de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

4- Se **acoge** el recurso de casación en la forma deducido en lo principal por Adolfo Ernesto Lara Bustamante, en contra de la sección civil de la sentencia de



veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la que se anula parcialmente y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista pero separadamente.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

N° 44.836-2021.-

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. No firma el Ministro Sr. Brito y la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 15:34:26

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 15:34:26

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 01/12/2023 15:34:27



En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Del fallo de casación que precede, se reiteran sus motivos 18° a 22°.

Del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se mantienen su parte expositiva, considerativa y resolutive, eliminándose el punto II.-

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

1°) Que, la indemnización del daño producido y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo mandata la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de Derecho Internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados;

2°) Que, una vez zanjado lo anterior, y para los efectos de la determinación del perjuicio reclamado, es conveniente tener en cuenta que el daño moral consiste en la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente,



a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad, hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. Como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 17.842-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado;

3°) Que en este entendido, acreditados como han sido los hechos denunciados, el contexto en que se perpetraron y la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron, surge la efectividad del padecimiento del daño moral, de manera que el Estado debe reparar ese detrimento, por el hecho de sus agentes, cuya determinación concierne a la prudencia del tribunal, y no podría ser de otro modo, por cuanto materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que le provocaron al actor, su detención y sometimientos a torturas y apremios ilegítimos;

4°) Que, acorde a lo razonado, resulta preciso argumentar que la indemnización de perjuicios por daño moral, no puede fijarse recurriendo



únicamente a la prudencia de los juzgadores, los que deben observar la realidad de cada asunto en particular y los montos que, en casos similares se han otorgado, para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia;

5°) Que la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo, reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada *prudencialmente*; la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a tales objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino que, por el contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que, sin duda, le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno, liberarlo del deber de expresar las razones que condujeron a esa decisión, toda vez que, de ese modo, se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

6°) Que, apreciando las probanzas rendidas, relacionadas en el considerando segundo del fallo que se revisa, los sentenciadores establecieron que *“Entre las actividades y operativos realizados por el servicio de inteligencia a partir del mes de septiembre de 1973 en la entonces provincia de O Higgins, resultaron privados de su libertad ” personal y luego fueron interrogados en dependencias de la antigua Intendencia, Marcos Erik Pezoa Salfate, Alfonso*



Araya Salinas, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Adolfo Lara Bustamante, Manuel Jesús Lara Bustamante, María Luisa Gutiérrez Catalán, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y Alfredo Antonio Martínez Córdova, todos militantes del Partido Comunista o Partido Socialista, a excepción de María Gutiérrez Catalán, quien era funcionaria del Juzgado de Policía Local de Machalí.

Una vez detenidos por distintas unidades policiales y militares de la Región, fueron trasladados e ingresados a la Cárcel Pública de Rancagua, y en el caso de María Gutiérrez Catalán en la Cárcel de Mujeres, "El Buen Pastor", de la misma ciudad. Desde esos lugares conducidos en distintas fechas y horas por funcionarios de Investigaciones o del Ejército hasta las instalaciones en que estaba instalada la Fiscalía Militar.

En dependencias de la Fiscalía Militar los detenidos fueron interrogados por el equipo designado para esas funciones, siendo sometidos a sesiones de torturas, les golpearon con los puños, pies, y un "tonto de goma" -vara metálica recubierta con goma-, en distintas partes de sus cuerpos, les aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, manos, brazos, piernas y rostro, y además fueron amenazados de muerte. María Gutiérrez Catalán conjuntamente con los flagelos descritos fue violentada sexualmente.

Los detenidos, Manuel Lara Bustamante, Adolfo Lara Bustamante, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Joel Antonio Quintana García y David Eleuterio Quintana García, fueron condenados en Consejo de Guerra, y el resto quedó en libertad en diferentes fechas, entre los meses de octubre de 1973 y enero de 1976, sin que hubiesen sido sometidos a proceso alguno.

El demandante en particular, estuvo detenido desde el 17 de septiembre de 1973 hasta comienzos de 1975, de manera que, teniendo en consideración



que los hechos son idénticos al resto de los demandantes y que, como indicó en el fallo de casación, la cifra fijada respecto de ellos resultaba acorde con los montos que esta Corte ha estado estableciendo en casos similares, se fijará en \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), suma que por lo demás, fue el monto solicitado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10, 40 y 425 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se decide:

Se confirma la sentencia apelada de dieciocho de junio de dos mil diecinueve dictada en la causa Rol N° 451-2017, seguida por el Ministro de Fiero don Mario Carroza, que hace lugar a las demandas civiles interpuestas a fojas 1579, 1595 y 1688, con costas, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile y al demandado civil don Luis Alberto Medina Aldea, a pagar en forma solidaria, a cada uno de los actores civiles; don Arturo Mariano Droguen Madrid, don Alfonso Araya Salinas, don Juan Carlos Pérez Muñoz, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, y a don Alfredo Antonio Martínez Córdova, la suma de cuarenta millones de pesos (\$ 40.000.000) por concepto de daño moral, **con declaración** que, respecto de don Adolfo Ernesto Lara Bustamante, por el mismo concepto, se aumenta a la suma de cuarenta millones de pesos (\$ 40.000.000), las que se reajustarán según la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre la fecha que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria y su pago efectivo, e intereses desde que se constituya en mora.

Regístrese y devuélvase.



Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 44.836-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. No firma el Ministro Sr. Brito y la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 15:34:28

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 01/12/2023 15:34:29

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 01/12/2023 15:34:29



En Santiago, a uno de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

